

ITALIA

Paulino César Pardo Prieto

Prof. Titular de Escuela Universitaria de Derecho Eclesiástico del Estado
Universidad de León

1. ACUERDOS CON CONFESIONES RELIGIOSAS.

En conexión con lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución italiana¹, en abril de 2007 se suscribieron por el Ejecutivo italiano seis nuevos acuerdos con confesiones minoritarias – *Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová; Iglesia Apostólica de Italia; Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; Sagrada Archidiócesis Ortodoxa de Italia y Exarcado de la Europa del Sur; Unión Budista Italiana; Unión Hinduista Italiana, Sanatana Dharma Samgha*– así como dos acuerdos modificatorios de los ya vigentes, suscritos, el uno, con la *Unión Italiana de las Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día*, modifica el artículo 12 del acuerdo de 29 de diciembre de 1986 (Ley 516/1988, de 22 de noviembre), para reconocer los títulos de Diplomado y Licenciado en Teología y Cultura Bíblica otorgados por el *Instituto Adventista de Cultura Bíblica*, y, el otro, con la *Mesa Valdense*, modifica el artículo 3,

¹ Referente obligado para todas ellas es el artículo octavo de la Constitución italiana, conforme a cuyo literal: “*Todas las confesiones religiosas serán igualmente libres ante la ley.*”

Las confecciones religiosas distintas de la católica tendrán derecho a organizarse según sus propios estatutos en la medida en que no se opongan al ordenamiento jurídico italiano.

Sus relaciones con el Estado serán reguladas por ley sobre la base de acuerdos con las representaciones respectivas.”

apartado tercero, del acuerdo de 25 de enero de 1993 (Ley 409/1993, de 5 de octubre), para procurar a la *Mesa* participar de las asignaciones por opciones no expresas de los contribuyentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Todos ellos están a la espera de ser aprobados como leyes en sede parlamentaria.

Igualmente, en espera de impulso a su tramitación permanece en el Senado italiano el Proyecto sobre “*Normas sobre libertad religiosa y derogación de la normativa sobre cultos admitidos*”. Nos ha parecido de utilidad ensayar una tabla de concordancias entre cada uno de estos textos llamados a conformar –junto a los otros acuerdos vigentes– el filón más sustancioso de la ordenación de la libertad religiosa en aquel país. No puede ser esta crónica el espacio donde glosemos el pormenor de los resultados de dicho cotejo², pero sí podemos al menos poner de relieve el alto grado de coincidencia entre sí de los acuerdos y, aún en menor medida, de todos ellos con el *Proyecto de Ley de Normas sobre Libertad Religiosa*. Y, si bien es cierto que el mismo ha evitado cuestiones de gran calado para el ejercicio de la libertad de conciencia y religiosa que sí han contemplado los acuerdos, también lo es que el grueso de los contenidos suscritos desde 1984 por las confesiones minoritarias no se separa de la que habría de erigirse en normativa de Derecho común en la materia.

Entre las carencias del Proyecto que pone de relieve la comparación, encontramos que en las “instituciones cerradas” no se ha contemplado la puesta a disposición de los creyentes de locales apropiados para el culto, ni una alimentación alternativa; tampoco hay más opción para el reconocimiento de las festividades particulares en el ámbito laboral que su

² Aunque cabe adelantar que para el ordenamiento italiano bien podrían valer la generalidad de las conclusiones obtenidas para España en un trabajo anterior. *Vid.* PARDO PRIETO, P.C., *Laicidad y Acuerdos del Estado con Confesiones Religiosas*, Valencia, 2007.

incorporación al contrato privado o convenio colectivo³; tampoco hay previsión de que las confesiones minoritarias sin acuerdo impartan asignaturas de contenido religioso en los niveles inferiores de enseñanza (aunque sí oferta realizar libremente actividades didácticas en el marco de la escuela), ni se mencionan las deducciones fiscales a particulares o la atribución a las confesiones de un porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al modo que lo hacen las que han suscrito acuerdos. Por el contrario, entre las normas que convertirán definitivamente en redundantes una amplia porción de los pactos, tenemos las relativas a extensión de la libertad religiosa, definición y funciones de los ministros de culto, servicio de asistencia religiosa, exención de la clase de religión, derecho a fundar y gestionar centros de enseñanza, celebración de ritos matrimoniales confesionales, capacidad jurídica y de obrar de las entidades religiosas o garantías a la celebración de ritos funerarios y enterramientos.

Este resultado encierra una de tantas paradojas de la cooperación mediante acuerdos con confesiones religiosas. De un lado, que tal política –cuya práctica reanudó Italia, como es conocido, en 1984– permite orientar la legislación unilateral del Estado en favor de las necesidades de los individuos creyentes⁴ y, de otro, que de aprobarse el *Proyecto sobre Libertad Religiosa* carecerán de sentido práctico la gran mayoría de las disposiciones albergadas por los pactos.

2. MINORÍAS.

En Consejo de Ministros extraordinario celebrado el día 31 de octubre de 2007 modificó el Decreto Legislativo núm. 30 de 2007, dando lugar a que puedan ser expulsados del país aquellos

³ Sobre esto, DE OTO, A., *Precetti religiosi e mondo del lavoro. Le attività di culto tra norme generali e contrattazione collettiva*, Roma, 2007, pp. 81 y ss.

⁴ LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D. (LLAMAZARES CALZADILLA, M^a.C., col.), *Derecho de la libertad de conciencia, I. Libertad de conciencia y laicidad*, Madrid, 2002, p. 358.

extranjeros que perteneciendo al la Unión Europea llevaran a cabo actividades contrarias a la *dignidad humana*, los *derechos fundamentales*, el *orden público* o la *normal convivencia*, al tiempo que prevé penas de reclusión de hasta tres años a quienes contravinieran la prohibición de ingresar en territorio italiano.

El Decreto 181, al albur de “*razones de urgencia*”, determinadas por episodios violentos protagonizados por ciudadanos comunitarios y una opinión pública proclive a aceptar las limitaciones a los derechos civiles de los extranjeros, amplía la ya de por sí extensa lista de conceptos jurídicos indeterminados sobre los que discrecionalmente puede decidirse la expulsión, imponiendo extraordinarias sanciones al reingreso en el país de modo ilícito.

En algún número anterior de *Laicidad y libertades. Escritos jurídicos* hemos hablado de deslizamiento del ordenamiento italiano en la legislatura precedente hacia la conformación jurídica del extranjero como “*enemigo*”⁵ y éste pudiera ser un episodio más de afirmación de un “*Derecho sancionador del enemigo*”, si bien, en los decretos números 30 y 181 de 2007 es sobre el extranjero comunitario sobre quien recae la norma adversa, diferencia sustancial que pone freno a uno de los grandes avances hacia la construcción europea⁶.

⁵ PARDO PRIETO, P.C., *Cronica Legislativa: Italia*, en *Laicidad y libertades. Escritos jurídicos*, vol. II, *Crónicas y recensiones*, núm. 5, diciembre 2005, pp. 164 – 165.

⁶ FERNÁNDEZ CORONADO, A., *Derecho de la libertad de conciencia en la Unión Europea: Pluralismo y minorías*, Madrid, 2002, pp. 13 - 15.

ANEXO

1. ACUERDOS CON CONFESIONES RELIGIOSAS.

1. 1. INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA.

Articolo 1 (Libertà religiosa)

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

3. E' garantita ai testimoni di Geova e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

4. E' riconosciuto ai testimoni di Geova il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Articolo 2 (Ministri di culto)

1. Ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova, nominati a norma dello statuto della Congregazione, è assicurato il libero esercizio del ministero.

2. I medesimi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero.

3. I ministri di culto hanno facoltà di essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 3, 4 e 6, la Congregazione centrale rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.

Articolo 3 (Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. Negli istituti ospedalieri e nelle case di cura o di riposo l'assistenza spirituale dei ricoverati testimoni di Geova e di altri ricoverati che ne facciano richiesta, è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 2.

2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e case è a tal fine libero e senza limitazioni d'orario.

3. Le direzioni di tali istituti e case sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

4. E' riconosciuto ai testimoni di Geova che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni della propria fede religiosa in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali si trovano.

5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento della assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dei competenti organi della confessione.

Articolo 4 (Assistenza spirituale ai detenuti)

1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale è assicurata dai ministri di culto designati dalla Congregazione centrale.

2. A tal fine la Congregazione centrale trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari competenti per territorio. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti il ministro di culto competente per territorio.

4. E' riconosciuto ai testimoni di Geova detenuti nei suddetti istituti il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni della propria fede in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali si trovano.

5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento della assistenza spirituale ai detenuti sono a carico dei competenti organi della confessione.

Articolo 5 (Insegnamento religioso nelle scuole)

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. E' esclusa qualsiasi ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova.

2. La Repubblica italiana riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.

4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla Congregazione centrale, o dalle Congregazioni o comunità locali dei testimoni di Geova, il diritto di rispondere

alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dalla Congregazione centrale con le medesime istituzioni.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 4 sono a carico della Congregazione centrale.

Articolo 6 (Matrimonio)

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo l'ordinamento dei testimoni di Geova e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi

possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.

6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettuata, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Articolo 7 (Festività)

1. Ai testimoni di Geova dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa per osservare la festività della Commemorazione della morte di Gesù Cristo, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. In tale ricorrenza si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova, su richiesta dei genitori o di loro stessi, se maggiorenni.

2. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

3. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività di cui al comma 1 è comunicata dalla Congregazione centrale al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 8 (Edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico dei testimoni di Geova non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la Congregazione centrale.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici suindicati, senza aver dato previo avviso e preso accordi con i ministri di culto responsabili dell'edificio.

3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dalla Congregazione centrale per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dei testimoni di Geova.

Articolo 9 (Emittenti radiotelevisive)

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle congregazioni ed enti facenti parte della confessione dei testimoni di Geova, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.

Articolo 10 (Riconoscimento di enti della confessione)

1. Ferma restando la personalità giuridica della Congregazione centrale, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, n. 783, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, altri enti costituiti nell'ambito della confessione dei testimoni di Geova, aventi sede in Italia, i quali

abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.

2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente della confessione dei testimoni di Geova è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata della Congregazione centrale. Alla domanda deve altresì essere allegato lo statuto dell'ente stesso.

3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale ed ai fini di cui al comma 1.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

5. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti della confessione dei testimoni di Geova, civilmente riconosciuti.

Articolo 11 (Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura.

Articolo 12 (Regime tributario degli enti della confessione)

1. Agli effetti tributari gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 13 (Gestione degli enti della confessione)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della Congregazione centrale e senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.

Articolo 14 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. La Congregazione centrale deve chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

4. Decorsi i termini di cui al comma 3, gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 15 (Mutamenti degli enti della confessione)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuto,

acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Congregazione centrale.

3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo della Congregazione centrale determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento della Congregazione centrale, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Articolo 16 (Deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica italiana prende atto che la confessione dei testimoni di Geova si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore della Congregazione centrale, degli enti da essa controllati e delle congregazioni locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Congregazione centrale.

Articolo 17 (Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa,

la Congregazione centrale concorre con lo Stato, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica italiana prende atto che la Congregazione centrale utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato per scopi umanitari, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri. La Congregazione centrale potrà devolvere dette somme anche per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti della confessione dei testimoni di Geova sono indicati con la denominazione "Congregazione cristiana dei testimoni di Geova".

3. La Congregazione centrale non partecipa all'attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Congregazione centrale, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Congregazione centrale.

5. La Congregazione centrale trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il Ministero dell'interno ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 18 (Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 16 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 17, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Congregazione centrale.

Articolo 19 (Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Congregazione centrale e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 20 (Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti della Congregazione centrale, delle congregazioni locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni, organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 21 (Ulteriori intese)

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa.

2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si

procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti della confessione dei testimoni di Geova con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 22 (Legge di approvazione dell'intesa)

1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

1. 2. INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

Articolo 1 (Libertà religiosa)

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della Chiesa Apostolica in Italia, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della Chiesa Apostolica in Italia e delle sue comunità, si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Articolo 2 (Ministri di culto)

1. La nomina e l'eventuale cessazione dei ministri di culto spetta al Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia, e sono insindacabili.

2. I Magistrati o altre Autorità non potranno richiedere ai ministri di culto di deporre o di dare informazioni su persone o

materie di cui siano venuti a conoscenza per motivo del loro ministero.

3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Chiesa Apostolica in Italia:

a) hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile;

b) sono dispensati dalla chiamata alle armi nel caso in cui siano ministri di culto con cura di anime.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 3, 5, 6 e 12 la Chiesa Apostolica in Italia rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto. Apposito elenco dei ministri di culto è tenuto dalla Chiesa Apostolica e trasmesso alle competenti amministrazioni.

Articolo 3 (Assistenza spirituale ai militari)

1. I militari appartenenti alla Chiesa Apostolica in Italia che lo richiedono hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche, che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

2. Qualora non esistano chiese della Chiesa Apostolica in Italia nel luogo ove prestano servizio, i militari membri di tali chiese, potranno comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica più vicina, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

3. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte della Chiesa Apostolica in Italia, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate con la liturgia e da un ministro di culto della Chiesa Apostolica in Italia.

4. Ai fini dell'assistenza spirituale e nel rispetto delle esigenze di servizio, è stabilito il diritto di accesso alle caserme di ministri di culto della Chiesa Apostolica in Italia e di organizzare

apposite riunioni, in locali predisposti in accordo con l'autorità militare competente.

5. Il comando militare competente mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

6. I ministri di culto della Chiesa Apostolica in Italia che siano militari in servizio o prestino servizio civile sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

Articolo 4 (Servizio militare)

1. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, la Repubblica italiana garantisce alla Chiesa Apostolica che gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

2. Possono richiedere, inoltre, di svolgere il servizio militare in attività di protezione e di assistenza civile.

Articolo 5 (Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (istituti ospedalieri, case di cura o di riposo) l'assistenza spirituale dei ricoverati della Chiesa Apostolica in Italia o di altri ricoverati che ne facciano esplicita richiesta, è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 2.

2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario.

3. Le direzioni di tali istituti e case, sono tenute a comunicare ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Articolo 6 (Assistenza spirituale ai detenuti)

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalla Chiesa Apostolica in

Italia. A tal fine la Chiesa Apostolica in Italia trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

2. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti, o delle loro famiglie, o per iniziative dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

3. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente nel territorio.

Articolo 7 (Oneri per l'assistenza spirituale)

1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale, di cui agli articoli 3, 5 e 6, sono a carico esclusivo degli organi competenti della Chiesa Apostolica in Italia.

Articolo 8 (Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni, pratiche religiose o atti di culto.

Articolo 9 (Richieste in ordine allo studio del fatto religioso)

1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalla Chiesa

Apostolica in Italia, e designati dal Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.

2. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dalla Chiesa Apostolica in Italia con le medesime istituzioni.

3. Eventuali oneri finanziari sono a carico della Chiesa Apostolica in Italia.

Articolo 10 (Scuole ed istituti di educazione)

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, e nei termini presentati dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa Apostolica in Italia il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Articolo 11 (Riconoscimento dei titoli di formazione teologica)

1. Sono riconosciuti, secondo la normativa vigente, le lauree in teologia e i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dalla scuola e facoltà del Centro Studi Teologici della Chiesa Apostolica in Italia a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Gli studenti del predetto istituto possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi

rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

4. La gestione ed il regolamento della scuola, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa Apostolica in Italia, ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Articolo 12 (Matrimonio)

1. La Repubblica italiana, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto della Chiesa Apostolica in Italia, aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio, ai sensi del comma precedente, debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile, al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, e dopo aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del primo comma e nel Comune suindicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

4. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.

5. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è

avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune del luogo, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

6. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia ommesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Articolo 13 (Tutela degli edifici di culto) 1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa Apostolica in Italia, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni, e previo accordo col Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza aver preso accordi con i ministri delle singole chiese.

3. Agli edifici di culto ed alle rispettive pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

Articolo 14 (Riconoscimento di enti della Chiesa Apostolica in Italia)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia, denominato "Fondazione Apostolica", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, possono essere riconosciute come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, altri enti costituiti nell'ambito della Chiesa Apostolica in Italia, aventi sede in Italia, quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.

2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente della Chiesa Apostolica in Italia è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata dal Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia. Alla domanda deve altresì essere allegato lo statuto dell'ente stesso.

3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale ed ai fini di cui al comma 1.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

5. Gli enti della Chiesa Apostolica in Italia che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti della Chiesa Apostolica in Italia, civilmente riconosciuti.

Articolo 15 (Attività di religione o di culto e diverse)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Articolo 16 (Regime tributario degli enti della confessione)

1. Agli effetti tributari gli enti della Chiesa Apostolica in Italia, civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Gli enti della Chiesa Apostolica in Italia civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 17 (Gestione degli enti della confessione)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della Chiesa Apostolica in Italia, civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo del Consiglio Nazionale senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.

Articolo 18 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. L'ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia denominato "Fondazione Apostolica" deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Decorso tale termine l'ente può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Gli enti della Chiesa Apostolica in Italia, civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Articolo 19 (Mutamenti degli enti della confessione)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente della Chiesa Apostolica in Italia civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia.

3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo della Chiesa Apostolica in Italia determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 20 (Pubblicazioni)

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati, relativi alla vita religiosa e alla missione della Chiesa Apostolica in Italia, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

2. E' riconosciuta agli incaricati dalla Chiesa Apostolica in Italia, la libertà di distribuzione gratuita in luoghi pubblici, di Bibbie ed altro materiale di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.

Articolo 21 (Colportori)

1. E' assicurata ai colportori della Chiesa Apostolica in Italia, la libertà di diffondere il Messaggio dell'Evangelo, attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.

2. I colportori, che sono in possesso dei requisiti di legge, hanno il diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal Comune.

Articolo 22 (Emittenti radiotelevisive)

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo, si informa ai principi di libertà, di manifestazione del pensiero e di pluralismo, dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze, si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti, gestite dalle comunità associate alla Chiesa Apostolica in Italia, operanti in ambito locale relative alla disponibilità di bacini di utenza, idonei a favorire l'economicità della gestione ed una adeguata pluralità di emittenti, in conformità alla disciplina del settore.

Articolo 23 (Contributi e deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica italiana prende atto che la Chiesa Apostolica in Italia si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 a favore della Chiesa Apostolica in Italia, dagli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa Apostolica in Italia.

Articolo 24 (Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la Chiesa Apostolica in Italia, concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinando le somme devolute a tale titolo dallo

Stato ad interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1, viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la Chiesa Apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte. Gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente alla Chiesa Apostolica in Italia, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Chiesa Apostolica in Italia.

Articolo 25 (Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 23 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 24, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Chiesa Apostolica in Italia.

Articolo 26 (Assegni corrisposti ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dalla Chiesa Apostolica in Italia, per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto, sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. La Chiesa Apostolica in Italia provvede ad operare, su tali assegni, le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle vigenti leggi.

Articolo 27 (Rendiconto della utilizzazione delle somme percepite)

1. La Chiesa Apostolica in Italia, trasmette, annualmente, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme, di cui agli articoli 23 e 24, e ne diffonde adeguata informazione.

2. Tale rendiconto deve, comunque, precisare:

a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme, di cui all'articolo 23, destinato al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;

c) gli interventi operati per le altre finalità previste all'articolo 24.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 28 (Tutela dei beni culturali)

1. La Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale della Chiesa Apostolica in Italia.

Articolo 29 (Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa Apostolica in Italia, e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 30 (Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa Apostolica in Italia, delle chiese che la costituiscono, degli istituti ed opere che ne fanno parte e delle persone che la compongono.

2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 31 (Ulteriori intese)

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.

3. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa Apostolica in Italia con lo Stato, verranno promosse, previamente in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 32 (Legge di approvazione dell'intesa)

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

1. 3. INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO MODIFICATIVA DELL'ARTICOLO 12 DELL'INTESA FIRMATA IL 29 DICEMBRE 1986 ED APPROVATA CON LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 516

Articolo 1 (Istituto Avventista di Cultura Biblica) 1. Il comma primo dell'articolo 12 dell'intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, firmata il 29 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

“Articolo 12

1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.”

Articolo 2 (Legge di approvazione dell'intesa) 1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

1. 4. INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Articolo 1 (Libertà religiosa)

1. In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione della “Chiesa”, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto ed i riti. La “Chiesa” ha piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.

2. E' garantita alla "Chiesa", alle sue organizzazioni, associazioni e fedeli la piena libertà di riunione e la libertà di manifestazione del pensiero mediante la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e stampati relativi al ministero ecclesiastico, alla vita religiosa e alla missione della "Chiesa", all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti sedi religiose della "Chiesa" nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuati senza alcuna autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

4. E' riconosciuta ai rappresentanti della "Chiesa" la libertà di distribuire gratuitamente, nei luoghi pubblici, copie del Libro di Mormon, della Bibbia e altri articoli e pubblicazioni riguardanti la religione della "Chiesa", senza la necessità di autorizzazione specifica o il pagamento di alcun tributo.

5. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà, di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste, presentate dalle emittenti gestite dalla "Chiesa" operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

Articolo 2 (Autonomia della "Chiesa")

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della "Chiesa" liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto e dei missionari, di cui agli articoli 3 e 4, le celebrazioni di culto, l'organizzazione della "Chiesa", degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa

aventi parte, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica italiana garantisce altresì la libera comunicazione e collaborazione della “Chiesa” in Italia con la sede centrale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e con qualsiasi altro suo ente nazionale ed internazionale.

Articolo 3 (Ministri di culto)

1. A tutti gli effetti sono ministri di culto della “Chiesa” le seguenti persone:

a) i Presidenti di palo e i Presidenti di distretto, i quali sono responsabili delle congregazioni esistenti all’interno delle suddivisioni geografiche denominate palo e distretto;

b) i Vescovi e i Presidenti di ramo, i quali sono responsabili di singole congregazioni di più piccole dimensioni;

c) i Presidenti del tempio, i quali sono responsabili delle attività e delle cerimonie religiose che si svolgono nel tempio;

d) i Presidenti di missione, i quali sono responsabili del lavoro svolto dai missionari in Italia.

Queste persone sono nominate dall’autorità della “Chiesa” gerarchicamente competente e svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso.

2. Ai ministri di culto è assicurato il libero esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento delle attività di cui all’articolo 21 e la libera diffusione del messaggio della “Chiesa” a fini di evangelizzazione, senza limiti territoriali.

3. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d’ufficio su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero.

4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e degli articoli 7, 8, 9 e 13, e attesa l’esistenza di una pluralità di ministeri, la “Chiesa” rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto.

Articolo 4 (Missionari e Presidenti di missione)

1. La “Chiesa” svolge attività missionaria in Italia. A tal fine si avvale delle prestazioni personali, volontarie, gratuite e senza fini di lucro dei propri missionari e Presidenti di missione, ai quali è assicurato il libero svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all’articolo 21 e la libera diffusione del messaggio della “Chiesa” a fini di evangelizzazione. Tali prestazioni sono regolate dalle disposizioni vigenti in materia di volontariato.

2. I missionari svolgono funzioni di religione o di culto, fra cui in particolare la predicazione del Vangelo, la celebrazione di riti e cerimonie religiose, lo studio della religione, la cura delle necessità delle anime, le attività di istruzione ed evangelizzazione.

3. I permessi di soggiorno ai Presidenti di missione e ai missionari stranieri presenti in Italia per lo svolgimento della propria missione vengono concessi per la durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi e vengono rinnovati per una volta in modo da coprire l’intera durata del periodo di missione, semprechè la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione attestante il loro status, rilasciata dall’autorità religiosa, la quale dovrà fornire tempestiva notizia di eventuali variazioni che possano intervenire.

4. La “Chiesa” provvede alla copertura assicurativa, tramite organizzazioni italiane o straniere, per le spese mediche ed ospedaliere dei missionari e dei Presidenti di missione durante il loro servizio volontario presso la “Chiesa” medesima, anche ai fini di cui alla normativa vigente in materia di immigrazione e condizione dello straniero.

5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e degli articoli 5, 7 e 8 e attesa l’esistenza di una pluralità di ministeri, la “Chiesa” rilascia apposita certificazione della qualifica di missionario e di Presidente di missione.

Articolo 5 (Servizio militare)

1. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i membri della “Chiesa”, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno possono, su loro richiesta vistata dall’autorità ecclesiastica, usufruire del rinvio dal servizio militare durante il tempo in cui sono missionari in attività, per un periodo non superiore ai trenta mesi.

Articolo 6 (Esercizio della libertà religiosa)

1. L’appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza nelle strutture socio-sanitarie, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto.

Articolo 7 (Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati)

1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati che lo richiedano, hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche della “Chiesa” che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.

2. Qualora non esistano congregazioni organizzate secondo i principi della “Chiesa” nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la congregazione più vicina nell’ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle dette chiese, i ministri della “Chiesa” possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. Fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, l’autorità competente metterà a disposizione i locali necessari e consentirà l’affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte della “Chiesa”, l’autorità competente adotta, d’intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che un ministro della “Chiesa” sovrintenda e celebri le esequie.

5. I ministri di culto della “Chiesa” appartenenti alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti degli appartenenti ai rispettivi corpi che lo richiedano.

Articolo 8 (Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. I ministri di culto e i missionari della “Chiesa” possono dare assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti alla “Chiesa” o ad altri ricoverati che ne facciano richiesta, nelle strutture socio-sanitarie, nelle case di cura o di riposo.

2. L’accesso dei soggetti di cui al comma 1 ai predetti istituti per i fini ivi indicati è libero e senza limitazione d’orario.

3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla autorità religiosa preposta alla “Chiesa” più vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Articolo 9 (Assistenza spirituale ai detenuti)

1. E’ assicurato il diritto da parte dei ministri di culto della “Chiesa” di dare assistenza spirituale negli istituti penitenziari.

2. A tal fine la “Chiesa” trasmette all’autorità competente l’elenco dei ministri di culto responsabili dell’assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza della predetta autorità, allegando la certificazione di cui all’articolo 3. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L’assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei

ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

4. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti l'autorità religiosa preposta alla "Chiesa" più vicina.

Articolo 10 (Oneri per l'assistenza spirituale)

1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono a carico esclusivo della "Chiesa".

Articolo 11 (Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari o modalità che abbiano effetti comunque discriminanti per gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.

3. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della "Chiesa" il diritto di rispondere a eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa organizzate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, con modalità concordate dalla "Chiesa" con le medesime istituzioni. Gli oneri finanziari sono comunque a carico della "Chiesa".

Articolo 12 (Istituzione di scuole ed istituti di educazione)

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla "Chiesa" il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.

2. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

3. Gli studenti delle scuole a cui sia riconosciuta la parità, potranno usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti degli istituti statali, per corsi di pari durata.

Articolo 13 (Matrimonio) 1. Ferma restando l'autonomia della "Chiesa" in materia religiosa o di culto, la "Chiesa" riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.

2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della "Chiesa", di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della "Chiesa" spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei

coniugi. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del Comune dove è avvenuta la celebrazione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità formale dell'atto e l'autenticità del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia ommesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Articolo 14 (Tutela degli edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della "Chiesa", nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità della "Chiesa".

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare in tali edifici per l'esercizio delle sue funzioni, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro della "Chiesa" responsabile dell'edificio.

3. Lo Stato italiano prende atto che le attività di culto della "Chiesa" possono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto della "Chiesa".

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dalla "Chiesa" per quanto concerne la

costruzione di nuovi edifici di culto. Ad essi ed alle relative pertinenze, si applica l'articolo 9, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni anche tributarie, contributi e concessioni.

Articolo 15 (Tutela dei beni culturali)

1. La Repubblica italiana e la “Chiesa” collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale della “Chiesa”.

Articolo 16 (Riconoscimento di enti ecclesiastici)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell’ “Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni”, ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 1993 ed iscritto nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Roma al n. 2230, possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici altri enti, istituzioni ed organismi costituiti nell’ambito della “Chiesa”, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza o beneficenza, su istanza del legale rappresentante dell’ente di cui si chiede il riconoscimento, controfirmata dal Presidente dell’ “Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni”.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell’ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico e ai predetti fini, sulla base della documentazione ad essi fornita.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell’articolo 21.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell’interno.

5. Gli enti riconosciuti in base ai commi precedenti assumono la qualifica di enti ecclesiastici della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni civilmente riconosciuti.

Articolo 17 (Mutamenti degli enti ecclesiastici)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico della “Chiesa” civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell’interno, sentito l’”Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni”.

3. La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte dell’organo statutariamente competente della “Chiesa”, determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell’ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell’organo statutariamente competente, fatti salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie.

Articolo 18 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti ecclesiastici della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dall’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, ove già non iscritti. Decorso tale termine gli enti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.

Articolo 19 (Gestione degli enti ecclesiastici)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo degli organi competenti della “Chiesa”, senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.

Articolo 20 (Trasferimento di beni)

1. I trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore dell’”Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni” da parte della “Foreign Lands Corporation”, della “Property Reserve Inc.” (già “Deseret Title Holding Corporation”), della “Deseret Management Corporation” e della “Corporation of the Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints”, tutte con sede a Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d’America, nonché della “Kirche Jesu Christi Der Heiligen Der Letzen Tage in der Schweiz”, con sede a Zurigo, Svizzera, effettuati entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni tributo ed onere.

Articolo 21 (Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

2. La Repubblica italiana prende atto che, per la “Chiesa”, la cura delle necessità delle anime comprende anche la ricerca genealogica necessaria per la salvezza delle anime degli antenati. Tale attività è comunque svolta nel rispetto delle leggi vigenti.

Articolo 22 (Regime tributario degli enti ecclesiastici)

1. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della “Chiesa”, incluso l’”Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni”, aventi fine di religione o di culto, così come le attività esercitate dagli enti predetti e dirette a tali scopi, sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l’applicabilità di norme più favorevoli.

2. Tali enti, tuttavia, possono svolgere liberamente anche attività diverse da quelle di religione o di culto. In tal caso dette attività saranno assoggettate alle leggi dello Stato concernenti la disciplina, anche tributaria, inerente alle medesime.

Articolo 23 (Deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica italiana prende atto che la “Chiesa” si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’IRPEF, le erogazioni liberali in denaro che siano destinate alle attività di cui all’articolo 21, lettera a), ed al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, fino all’importo di Euro 1.032,91, a favore dell’”Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni”.

3. Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui al secondo comma ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall’autorità governativa e dalla “Chiesa”.

Articolo 24 (Cimiteri)

1. I piani regolatori cimiteriali dovranno prevedere, su richiesta della “Chiesa”, reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, costituiti mediante concessione di un’area adeguata del cimitero in conformità delle leggi vigenti.

2. La sepoltura nei cimiteri della “Chiesa” e nei reparti speciali dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità dei riti e della tradizione della “Chiesa” medesima.

3. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico della “Chiesa”, le concessioni di cui all’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni.

4. L’inumazione nei reparti della “Chiesa” ha luogo secondo un regolamento emanato dalla stessa, in conformità con la normativa italiana in materia.

5. Nei cimiteri della “Chiesa” è assicurata l’osservanza dei riti e delle cerimonie della “Chiesa”.

Articolo 25 (Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell’emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla “Chiesa” ed avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 26 (Cessazione di efficacia della normativa precedente e delle norme contrastanti) 1. Con l’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della “Chiesa” nonché degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti della “Chiesa”, comunità ed enti e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in

vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 27 (Ulteriori intese)

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della "Chiesa" con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 28 (Legge di approvazione della presente intesa)

1. Il Governo della Repubblica italiana presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

1. 5. INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SACRA ARCIDIOSI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE

Articolo 1 (Libertà religiosa)

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'Arcidiocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in

materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

3. E' garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associazioni appartenenti all'Arcidiocesi la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

4. E' riconosciuto ai cristiani ortodossi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Articolo 2 (Ministri di culto)

1. I chierici dell'Arcidiocesi sono ministri di culto e godono pertanto del libero esercizio del loro ministero.

2. I ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del proprio ministero.

3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto dell'Arcidiocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare od essere assegnati al servizio civile.

4. I ministri di culto hanno la facoltà di essere iscritti nel Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 3, 4, 5 e 8 l'Arcidiocesi rilascia apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero.

Articolo 3 (Assistenza spirituale ai militari)

1. I militari ortodossi, appartenenti a parrocchie dell'Arcidiocesi, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche ortodosse che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del loro servizio militare.

2. Qualora non esistano chiese dell'Arcidiocesi nel luogo ove prestino il servizio, i militari ortodossi appartenenti

all'Arcidiocesi potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa ortodossa più vicina nell'ambito provinciale o regionale, previa dichiarazione del sacerdote della parrocchia dell'Arcidiocesi competente per territorio.

3. In caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto dell'Arcidiocesi.

Articolo 4 (Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (istituti ospedalieri, case di cura o di riposo) l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti all'Arcidiocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta è assicurata dai ministri di culto dell'Arcidiocesi di cui all'articolo 2.

2. L'accesso di tali ministri di culto alle predette strutture è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.

3. Le direzioni di tali strutture sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari.

4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dell'Arcidiocesi.

Articolo 5 (Assistenza spirituale ai detenuti)

1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi è assicurata dai ministri di culto designati dall'Arcidiocesi.

2. A tale fine l'Arcidiocesi trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari competenti per territorio. Tali ministri di

culto sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolari autorizzazioni.

3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto dell'Arcidiocesi, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti o dai loro familiari il ministro di culto dell'Arcidiocesi competente per territorio.

4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai detenuti sono a carico dell'Arcidiocesi.

Articolo 6 (Insegnamento religioso nelle scuole)

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità, senza distinzione di religione. E' esclusa qualsiasi ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi.

2. La Repubblica italiana riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la potestà su di essi.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico prevede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme d'insegnamento religioso diffuso nello svolgimento di programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.

4. La Repubblica italiana nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Arcidiocesi, il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività s'inserisce nell'ambito delle attività

facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'Arcidiocesi con le medesime istituzioni.

5. Gli oneri finanziari derivati dall'applicazione del comma 4 sono a carico dell'Arcidiocesi.

Articolo 7 (Istruzione scolastica ortodossa)

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Arcidiocesi il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Articolo 8 (Matrimonio)

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell'Arcidiocesi in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione con un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i

diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio, allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di matrimonio.

6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al predetto ministro di culto.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Articolo 9 (Festività)

1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti all'Arcidiocesi, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa nelle seguenti grandi festività religiose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

2. Il Venerdì Santo e nelle ricorrenze indicate nel comma precedente si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli

alunni ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, su richiesta dei genitori o tutori, o di loro stessi, se maggiorenni.

3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

4. Entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festività di cui al comma 1 sono comunicate dall'Arcidiocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 10 (Edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico dell'Arcidiocesi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la medesima Arcidiocesi.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici aperti al culto pubblico, senza avere dato previo avviso e preso accordi con l'Arcidiocesi.

3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Arcidiocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

5. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della vigente normativa.

Articolo 11 (Patrimonio artistico e culturale)

1. La Repubblica italiana e l'Arcidiocesi si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale ortodosso.

Articolo 12 (Emittenti radiotelevisive)

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo s'informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di

pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dagli enti facenti parte dell'Arcidiocesi, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

Articolo 13 (Riconoscimento di enti ortodossi)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Arcidiocesi, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1998 e degli altri enti ortodossi forniti di personalità giuridica (*Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia*, decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 850; *Chiesa e Confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Nazionali Greci di Napoli*, legge 13 luglio 1877, n. 3942, serie 2; *Comunità Greco-Orientale di Trieste*, decreti del Governo austriaco del 17 marzo 1784 e del 28 novembre 1888), possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell'interno, altri enti (diocesi, decanati o vicariati, comunità, parrocchie, monasteri, confraternite), costituiti nell'ambito dell'Arcidiocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli d'istruzione, assistenza e beneficenza.

2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente ortodosso è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata dall'Arcidiocesi. Alla domanda deve essere altresì allegato lo statuto dell'ente stesso.

3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale e ai fini di cui al comma 1.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di un paese dell'Unione europea avente domicilio in Italia.

5. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti.

Articolo 14 (Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso attività commerciali o a scopo di lucro.

Articolo 15 (Regime tributario degli enti appartenenti all'Arcidiocesi)

1. Agli effetti tributari gli enti appartenenti all'Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione.

2. Gli enti dell'Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 16 (Gestione degli enti appartenenti all'Arcidiocesi)

1. La gestione ordinaria e quella di straordinaria amministrazione degli enti ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo della stessa

Arcidiocesi e senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.

Articolo 17 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. L'Arcidiocesi e i suoi enti civilmente riconosciuti devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Decorsi tali termini gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 18 (Mutamenti degli enti dell'Arcidiocesi)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ortodosso dell'Arcidiocesi, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente dell'Arcidiocesi uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Arcidiocesi.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte dell'Arcidiocesi determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Arcidiocesi, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Articolo 19 (Deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica italiana prende atto che l'Arcidiocesi si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91 a favore dell'Arcidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'Arcidiocesi.

Articolo 20 (Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'Arcidiocesi concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica italiana prende atto che l'Arcidiocesi utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Arcidiocesi è indicata con la denominazione "*Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale*".

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti l'Arcidiocesi dichiara di partecipare alla

loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Arcidiocesi, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Arcidiocesi.

5. L'Arcidiocesi trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dall'articolo 19 e dal comma 1 del presente articolo.

7. Il Ministero dell'interno ne trasmette copia, con propria relazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 21 (Assegni ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dall'Arcidiocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 2 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'Arcidiocesi provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. L'Arcidiocesi provvede altresì per i ministri di culto che vi siano tenuti al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 22 (Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 19 e all'aliquota IRPEF di cui all'articolo 20, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'Arcidiocesi.

Articolo 23 (Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Arcidiocesi e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 24 (Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti dell'Arcidiocesi, delle comunità locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni, organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 25 (Ulteriori intese)

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa.

2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Arcidiocesi con lo Stato, saranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 26 (Legge di approvazione dell'intesa)

1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

1. 6.- INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA VALDESE MODIFICATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 25 GENNAIO 1993 ED APPROVATA CON LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 409

Articolo 1 (Modifica dell'intesa del 25 gennaio 1993)

1. La Repubblica italiana e la Tavola Valdese in rappresentanza della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste), considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, convengono ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449, di modificarla con le seguenti disposizioni.

Articolo 2 (Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 è sostituito dal seguente:

“3. L’attribuzione alla Tavola Valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse”.

Articolo 3 (Entrata in vigore)

1. Le modifiche apportate all’intesa stipulata il 25 gennaio 1993 decorrono dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Articolo 4 (Norma finale)

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.

Roma 4 aprile 2007

1. 7.- INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE BUDDHISTA ITALIANA

Articolo 1 (Autonomia dell'UBI)

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'UBI, si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica italiana garantisce la libera comunicazione dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.

Articolo 2 (Libertà religiosa)

1. La Repubblica italiana riconosce all'UBI ed agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

2. E' garantita all'UBI, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Articolo 3 (Servizio militare)

1. La Repubblica italiana, preso atto che l'UBI è per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Articolo 4 (Assistenza spirituale)

1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o in case di cura o di riposo. Apposito elenco sarà tenuto dall'UBI e trasmesso alle competenti amministrazioni.

2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi dovrà essere assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai ministri di culto, di cui l'UBI trasmetterà apposito elenco alle autorità competenti, dovrà essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UBI.

5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI potranno ottenere opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.

Articolo 5 (Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli alunni e alunne delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Viene riconosciuto a persone designate dall'UBI il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UBI con le medesime istituzioni.

3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2 sono posti a carico dell'UBI.

Articolo 6 (Scuole ed istituti di educazione)

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UBI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Articolo 7 (Ministri di culto)

1. La qualifica di ministro di culto è certificata dall'UBI, che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.

2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.

4. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Articolo 8 (Trattamento delle salme e cimiteri)

1. Agli appartenenti all'UBI è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

Articolo 9 (Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi di Dharma, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Articolo 10 (Riconoscimento degli enti)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Unione Buddhista Italiana (UBI), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1991, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, dell'associazione Santacittarama, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1995, dell'Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1999, della FPMT Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1999, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo.

Articolo 11 (Modalità per il riconoscimento)

1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UBI.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità delle disposizioni dell'articolo 9.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. L'UBI e gli enti riconosciuti a termini dei commi precedenti assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.

Articolo 12 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. L'UBI e gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, ove non già iscritti.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 13 (Mutamenti degli enti religiosi)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UBI e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso buddhista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UBI.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presidente dell'UBI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'UBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 14 (Regime tributario dell'UBI)

1. Agli effetti tributari, l'UBI e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. L'UBI e tali organismi possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.

Articolo 15 (Tutela degli edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UBI.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.

Articolo 16 (Tutela dei beni culturali)

1. La Repubblica italiana e l'UBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali facenti parte del patrimonio dell'UBI e degli organismi da essa rappresentati.

Articolo 17 (Pubblicazioni)

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'articolo 15 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, né ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

Articolo 18 (Contributi e deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica italiana prende atto che l'UBI si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UBI e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e alle attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 19 (Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'UBI concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto.

2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UBI entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi

dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'UBI stessa.

Articolo 20 (Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 18 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 19, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UBI.

Articolo 21 (Assegni corrisposti ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dall'UBI e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'UBI e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 22 (Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite)

1. A cura dell'UBI vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 18 e 19 e l'UBI ne diffonde adeguata informazione.

2. Tali rendiconti devono comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 19 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 18 e 19.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 23 (Festa religiosa buddhista)

1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, su loro richiesta, di osservare la festa del Vesak, che celebra la nascita, l'illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre convenzionalmente l'ultimo sabato e domenica del mese di maggio di ogni anno. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Articolo 24 (Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UBI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 25 (Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. Le disposizioni della legge di approvazione della presente intesa si applicano agli organismi che si associano all'UBI a termini dello statuto e cesseranno di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine l'UBI è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.

3. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 26 (Ulteriori intese)

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa entro il termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa. Ove nel frattempo una delle parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.

2. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'UBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 27 (Legge di approvazione della presente intesa)

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

1. 8.- INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE INDUISTA ITALIANA, SANATANA DHARMA SAMGHA

Articolo 1 (Autonomia dell'UII) 1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII), liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto induista (vedico, puranico, agamico), l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

Articolo 2 (Libertà religiosa) 1. La Repubblica italiana riconosce all'UII ed agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

2. È garantita all'UII, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

3. È riconosciuto all'UII e ai suoi appartenenti il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Articolo 3 (Servizio militare)

1. La Repubblica italiana, preso atto che l'UII è per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Articolo 4 (Assistenza spirituale)

1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (istituti ospedalieri, case di cura o di riposo).

Apposito elenco sarà tenuto dall'UII e trasmesso alle competenti amministrazioni.

2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi dovrà essere assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto induista. Ai ministri di culto, di cui l'UII trasmetterà apposito elenco alle autorità competenti, dovrà essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UII.

5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII potranno ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.

Articolo 5 (Insegnamento religioso nelle scuole) 1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione induista rappresentata dall'UII.

2. La Repubblica italiana riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.

4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'UII, il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UII con le medesime istituzioni.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 4 sono a carico dell'UII.

Articolo 6 (Scuole ed istituti di educazione)

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Articolo 7 (Ministri di culto)

1. La qualifica di ministro di culto, secondo la definizione dell'articolo 26 dello statuto allegato alla presente intesa, è certificata dall'UII che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente intesa.

2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.

4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Articolo 8 (Matrimonio)

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell'UII aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo l'ordinamento induista e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi

possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.

6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto deve trasmettere un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Articolo 9 (Trattamento delle salme e cimiteri)

1. Agli appartenenti all'UII è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

Articolo 10 (Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri (Veda, Purana, Agama, Itihasa, Sastra), all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Articolo 11 (Riconoscimento degli enti)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'UII, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi religiosi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo dell'UII.

Articolo 12 (Modalità per il riconoscimento)

1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UII, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UII.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità delle disposizioni dell'articolo 10.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. L'UII e gli enti riconosciuti a termini dei commi precedenti assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente riconosciuti.

Articolo 13 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. L'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Decorso tale termine, l'UII può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Gli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Articolo 14 (Mutamenti degli enti religiosi)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UII e degli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso induista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UII.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presidente dell'UII determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'UII, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 15 (Regime tributario dell'UII)

1. Agli effetti tributari, l'UII e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. L'UII e tali organismi possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.

Articolo 16 (Tutela degli edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico induista, di cui l'UII tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non

possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UII.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.

Articolo 17 (Tutela dei beni culturali)

1. La Repubblica italiana e l'UII si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali facenti parte del patrimonio dell'UII e degli organismi da essa rappresentati.

Articolo 18 (Pubblicazioni)

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UII, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'articolo 16 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, né ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

Articolo 19 (Contributi e deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica italiana prende atto che l'UII si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UII e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e alle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 20 (Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'UII concorre, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 19, comma 2, anche ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri Paesi.

2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UII dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme alle stesse finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UII entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'UII stessa.

Articolo 21 (Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 19 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 20, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UII.

Articolo 22 (Assegni corrisposti ai ministri di culto) 1. Gli assegni corrisposti dall'UII e dagli organismi da essa rappresentati

per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'UII e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 23 (Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite)

1. A cura dell'UII vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 19 e 20 e l'UII ne diffonde adeguata informazione.

2. Tali rendiconti devono comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 20 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 19 e 20.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 24 (Festa religiosa induista)

1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, su loro richiesta, di osservare la festa Indù "Dipavali" che rappresenta, tra le feste dedicate alle diverse divinità e seguite dalle relative tradizioni, la Vittoria della Luce sull'Oscurità (viene celebrata il giorno di luna nuova – amavasja - tra la seconda metà del mese di ottobre e la prima

metà di novembre). Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

2. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività di cui al comma 1 è comunicata dall'UII al Ministero dell'Interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 25 (Emittenti radiotelevisive)

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dall'UII o da enti facenti parte della confessione dell'UII, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.

Articolo 26 (Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UII e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 27 (Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. Le disposizioni della legge di approvazione della presente intesa si applicano agli organismi che si associano all'UII a termini dello statuto e cesseranno di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine l'UII è tenuta a comunicare tempestivamente

alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.

3. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 28 (Ulteriori intese)

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa entro il termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa. Ove nel frattempo una delle parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.

2. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'UII con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 29 (Legge di approvazione della presente intesa) 1.
Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

CRÓNICA LEGISLATIVA DE ITALIA

Índice de concordancias (*Disegno di legge / Intese 2007*)⁷.

<i>NORME SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA E ABROGAZIONE DELLA LEGISLAZIONE SUI CULTI AMMESSI. DISEGNO DI LEGGE N. 945.</i>	<i>INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONGREGAZIONE E CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA</i>	<i>INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA</i>	<i>INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI</i>	<i>INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE</i>
Arts. 15 y 1, 2, 3, 5, 6, 7	Articolo 1 (Libertà religiosa)	Articolo 1 (Libertà religiosa)	Articolo 1 (Libertà religiosa)	Articolo 1 (Libertà religiosa)
Arts. 15 y 1, 2, 3, 5, 6, 7			Articolo 2 (Autonomia della "Chiesa")	
Arts. 10, 27 y 38	Articolo 2 (Ministri di culto)	Articolo 2 (Ministri di culto)	Articolo 3 (Ministri di culto)	Articolo 2 (Ministri di culto)
Art. 10			Articolo 4 (Missionari e Presidenti di missione)	
Art. 8	Articolo 3 (Assistenza spirituale ai ricoverati)	Articolo 5 (Assistenza spirituale ai ricoverati)	Articolo 6 (Esercizio della libertà religiosa) Articolo 8 (Assistenza spirituale ai ricoverati)	Articolo 4 (Assistenza spirituale ai ricoverati)
Art. 8		Articolo 3 (Assistenza spirituale ai militari)	Articolo 7 (Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati)	Articolo 3 (Assistenza spirituale ai militari)
---		Articolo 4 (Servizio militare)	Articolo 5 (Servizio militare)	
Art. 8	Articolo 4 (Assistenza spirituale ai detenuti)	Articolo 6 (Assistenza spirituale ai detenuti)	Articolo 9 (Assistenza spirituale ai detenuti)	Articolo 5 (Assistenza spirituale ai detenuti)
---		Articolo 7 (Oneri per l'assistenza spirituale)	Articolo 10 (Oneri per l'assistenza spirituale)	
Art. 12	Articolo 5 (Insegn. religioso nelle scuole)	Articolo 8 (Insegn. religioso nelle scuole)	Articolo 11 (Insegn. religioso nelle scuole)	Articolo 6 (Insegn. religioso nelle scuole)

⁷ Omitimos, por su similitud al acuerdo con "La Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale", las intese con "Unione Buddhista Italiana" y "Unione Induista Italiana".

PAULINO CÉSAR PARDO PRIETO

		Articolo 9 (Richieste in ordine allo studio del fatto religioso)		
		Articolo 10 (Scuole ed istituti di educazione)	Articolo 12 (Istituzione di scuole ed istituti di educazione)	Articolo 7 (Istruzione scolastica ortodossa)
		Articolo 11 (Riconoscimento dei titoli di formazione teologica)		
Art. 6	Articolo 6 (Matrimonio)	Articolo 12 (Matrimonio)	Articolo 13 (Matrimonio)	Articolo 8 (Matrimonio)
	Articolo 7 (Festività)			Articolo 9 (Festività)
Art. 14	Articolo 8 (Edifici di culto)	Articolo 13 (Tutela degli edifici di culto)	Articolo 14 (Tutela degli edifici di culto)	Articolo 10 (Edifici di culto)
Art. 22		Articolo 28 (Tutela dei beni culturali)	Articolo 15 (Tutela dei beni culturali)	Articolo 11 (Patrimonio artistico e culturale)
Arts. 8.3; 23			Articolo 24 (Cimiteri)	
---	Articolo 9 (Emittenti radiotelevisive)	Articolo 22 (Emittenti radiotelevisive)		Articolo 12 (Emittenti radiotelevisive)
Arts. 23, 37, 39	Articolo 10 (Riconoscimento di enti della confessione)	Articolo 14 (Riconoscimento di enti della Chiesa Apostolica in Italia)	Articolo 16 (Riconoscimento di enti ecclesiastici)	Articolo 13 (Riconoscimento di enti ortodossi)
Art. 15	Articolo 13 (Gestione degli enti della confessione)	Articolo 17 (Gestione degli enti della confessione)	Articolo 19 (Gestione degli enti ecclesiastici)	Articolo 16 (Gestione degli enti appartenenti all'Arcidiocesi)
Arts. 19	Articolo 14 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)	Articolo 18 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)	Articolo 18 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)	Articolo 17 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
Art. 20.1 y .2	Articolo 15 (Mutamenti degli enti della confessione)	Articolo 19 (Mutamenti degli enti della confessione)	Articolo 17 (Mutamenti degli enti ecclesiastici)	Articolo 18 (Mutamenti degli enti dell'Arcidiocesi)
Art. 26	Articolo 11 (Attività di religione o di culto)	Articolo 15 (Attività di religione o di culto e diverse)	Articolo 21 (Attività di religione o di culto)	Articolo 14 (Attività di religione o di culto)

CRÓNICA LEGISLATIVA DE ITALIA

			Artículo 20 (Trasferimento di beni)	
Art. 25	Artículo 12 (Regime tributario degli enti della confessione)	Artículo 16 (Regime tributario degli enti della confessione)	Artículo 22 (Regime tributario degli enti ecclesiastici)	Artículo 15 (Regime tributario degli enti appartenenti all'Arcidiocesi)
	Artículo 16 (Deduzione agli effetti IRPEF)	Artículo 23 (Contributi e deduzione agli effetti IRPEF)	Artículo 23 (Deduzione agli effetti IRPEF)	Artículo 19 (Deduzione agli effetti IRPEF)
	Artículo 17 (Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)	Artículo 24 (Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)		Artículo 20 (Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)
		Artículo 26 (Assegni corrisposti ai ministri di culto)		Artículo 21 (Assegni ai ministri di culto)
		Artículo 27 (Rendiconto della utilizzazione delle somme percepite)		
Art. 13		Artículo 20 (Pubblicazioni)		
		Artículo 21 (Colportori)		
	Artículo 18 (Commissione paritetica)	Artículo 25 (Commissione paritetica)	Art. 23. 4	Artículo 22 (Commissione paritetica)
	Artículo 19 (Norme di attuazione)	Artículo 29 (Norme di attuazione)	Artículo 25 (Norme di attuazione)	Artículo 23 (Norme di attuazione)
Art. 41	Artículo 20 (Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)	Artículo 30 (Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti)	Artículo 26 (Cessazione di efficacia della normativa precedente e delle norme contrastanti)	Artículo 24 (Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)
Arts. 27 a 36	Artículo 21 (Ulteriori intese)	Artículo 31 (Ulteriori intese)	Artículo 27 (Ulteriori intese)	Artículo 25 (Ulteriori intese)
Arts. 35 - 36	Artículo 22 (Legge di approvazione dell'intesa)	Artículo 32 (Legge di approvazione dell'intesa)	Artículo 28 (Legge di approvazione della presente intesa)	Artículo 26 (Legge di approvazione dell'intesa)

2. MINORÍAS.

DECRETO LEGISLATIVO NÚM. 30, DE 6 DE FEBRERO DE 2007, SOBRE INCORPORACIÓN AL ORDENAMIENTO ITALIANO DE LA DIRECTIVA 2004/38/CE, RELATIVA AL DERECHO DE LOS CIUDADANOS DE LA UNIÓN Y SUS FAMILIARES A CIRCULAR Y ESTABLECERSE LIBREMENTE DENTRO DEL TERRITORIO DE LOS ESTADOS MIEMBROS (GU NÚM. 72, DE 27 DE MARZO) Y MODIFICACIONES INCORPORADAS POR POR DECRETO NÚM. 181, DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2007 (GU NÚM. 255, DEL 2).

Art. 1. Finalità.

1. Il presente decreto legislativo disciplina:

a) le modalita' d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Art. 2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

b) «familiare»:

1) il coniuge;

2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

Art. 3. Aventi diritto.

1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

Art. 4. Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea.

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione e' esercitato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

Art. 5. Diritto di ingresso.

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto.

3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con prioritá' rispetto alle altre richieste.

4. Nei casi in cui e' esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel

passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e' disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

Art. 6. Diritto di soggiorno fino a tre mesi.

1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalita', salvo il possesso di un documento d'identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validita', che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attivita' consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.

Art. 7. Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi.

1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

- a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- b) dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno,

e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attivita' principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

d) e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).

3. Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:

a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attivita' lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa;

c) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualita' di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attivita' professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Art. 8. Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno.

1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 9. Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari.

1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del

nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.

3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:

a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);

b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);

c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

4. Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) un documento di identita' o il passaporto in corso di validita', nonche' il visto di ingresso quando richiesto;

b) un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identita' si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.

7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio.

Art. 10. Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno

previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.

3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione:

a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validita', nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto;

b) di un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;

d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.

4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del rilascio.

5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita' anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validita'.

6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.

Art. 11. Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea.

1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1.

2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni.

Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, e successive modificazioni.

4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.

Art. 12. Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio.

1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste all'articolo 7, comma 1.

2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;

b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;

c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;

d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo 30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno e' comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un'attivita' lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia' costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

Art. 13. Mantenimento del diritto di soggiorno.

1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finche' soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli.

3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non puo' essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora;

a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi;

b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non piu' di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, di cui

all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002.

Art. 14. Diritto di soggiorno permanente.

1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.

2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.

3. La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Art. 15. Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari.

1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:

a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il

lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni;

b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;

c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.

2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.

3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al comma 1, lettera a) e lettera b),

non sono necessarie se il coniuge e' cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.

6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attivita' senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;

b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;

c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.

Art. 16. Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea.

1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato e' rilasciato entro trenta giorni

dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 15.

2. L'attestato di cui al comma 1 puo' essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identita' elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.

Art. 17. Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei».

2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e' presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validita' della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ed e' rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.

4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validita' della carta di soggiorno permanente.

Art. 18.

Continuita' del soggiorno 1. La continuita' del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonche' i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalita' previste dalla legislazione vigente.

2. La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.

Art. 19. Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente.

1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attivita' economica autonoma o subordinata, escluse le attivita' che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.

2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu' dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge.

4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.

Art. 20. *Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza*⁷

1. Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza,

⁷ En lugar de: "*Limitaciones al derecho de ingreso e de alojamiento por motivos de orden publico*".

puo' essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalita' ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.

3. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua eta', del suo stato di salute, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese d'origine.

4. I cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio dello Stato *solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza*.⁸

5. I cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni *possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza*⁹, salvo quando l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

6. Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni alla liberta' di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate

⁸ En lugar de: "*solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*".

⁹ En lugar de: "*possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato*"

dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari.

7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5 sono adottati dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza¹⁰.

7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le

¹⁰ En lugar de: "Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui ai comma 1, 4 e 5 e' adottato dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza".

modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286¹¹.

7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza¹².

8. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è *punito con la reclusione fino a tre anni¹³* ed è nuovamente allontanato con accompagnamento immediato.

9. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato *nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-bis¹⁴*, ovvero quando il provvedimento è fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza¹⁵, il questore

¹¹ Apartado nuevo, añadido por el Decreto 181/2007.

¹² Apartado nuevo, añadido por el Decreto 181/2007.

¹³ En lugar de: “e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000”.

¹⁴ En lugar de: “nel provvedimento di cui al comma 7”.

¹⁵ En lugar de: “quando il provvedimento e' fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato”.

dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale.

Art. 20-bis Allontanamento del cittadino dell'Unione o di un suo familiare sottoposto a procedimento penale.

1. *Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.*

2. *Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell'ipotesi dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.*

3. *Per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, puo' procedersi all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto, per qualsiasi causa, non sia sottoposto a misura cautelare detentiva¹⁶.*

Art. 21. Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno.

1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, puo' altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo conto della

¹⁶ Artículo nuevo añadido por el Decreto 181/2007.

durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine ed è tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. *Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato*¹⁷. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.

*2-bis. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2, è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro*¹⁸.

Art. 22. Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento.

1. Avverso il provvedimento *di cui all'articolo 20, comma 7*¹⁹, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.

2. Il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare.

Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

¹⁷ Nuevo inciso añadido por el Decreto 181/2007.

¹⁸ Apartado nuevo añadido por el Decreto 181/2007.

¹⁹ En lugar de: "di cui all'articolo 20".

3. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere accompagnato da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di²⁰ pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.

4. Avverso il provvedimento di allontanamento *di cui all'articolo 20, comma 7-bis, e all'articolo 21*²¹ puo' essere presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che lo ha disposto. Il ricorso e' presentato, a pena d'inammissibilità, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deciso entro i successivi trenta giorni.

5. Il ricorso puo' essere sottoscritto personalmente dall'interessato e puo' essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la sottoscrizione e' autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

6. La parte puo' stare in giudizio personalmente.

7. *Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 puo' essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza.*

²⁰ Se suprimen por el Decreto 181/2007 las palabras que figuraban a continuación: “*pública seguridad que mettan a repentaglio la*”.

²¹ En lugar de: “*di cui all'articolo 21*”.

8. *Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.*²²

9. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 7, il giudice decide con prioritá sulla stessa prima della scadenza fissata per l'allontanamento.

10. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.

Art. 23.

Applicabilita' ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani.

²² En lugar de:

“7. Contestualmente al ricorso puo' essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento.

Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.

8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine e alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.”

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu' favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.

Art. 24. Norma finanziaria.